



# SOBERANÍA DE LOS RECURSOS: El programa para la salida de África del estado de saqueo



Dossier nº16  
Instituto Tricontinental de Investigación Social  
mayo 2019

En mayo de 2011, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un documento de trabajo escrito por Burcu Aydin, titulado «Ghana: ¿Será bendecida o maldecida?» (WP/11/104). Se acababa de descubrir petróleo frente a las costas del país africano y se anticipaba una abundancia de recursos para el mismo. Aydin también se pregunta en el informe si Ghana se enfrentará a la «maldición de los recursos, también conocida como enfermedad holandesa», que ocurre cuando los ingresos por la venta de un recurso se precipitan a un país, aprecian la moneda y causan una crisis importante en otras áreas de la economía. Considerando los 150 países de ingresos medios y bajos, Aydin llegó a una conclusión sólida: «Los resultados muestran que existe una trampa de pobreza para los países pobres pero ricos en recursos debido a su baja calidad institucional». La mala gobernanza y la mala gestión macroeconómica, sugiere Aydin, disminuyen la posibilidad de que el auge de ingresos provenientes de los recursos naturales mejore el desarrollo de un país. En este documento de trabajo del FMI no se menciona a los otros actores del proceso, es decir, las empresas transnacionales que dominan el negocio de la extracción de recursos naturales. La literatura a favor de las corporaciones explica los problemas en la economía de los recursos de dos maneras: 1) mala gestión macroeconómica que permite que los ingresos inunden la economía y la moneda se valorice y 2) mala gobernanza debido a corrupción y robo por parte de funcionarios del gobierno.

Nada aquí cuestiona el papel de las empresas multinacionales. Si acaso, la academia y los medios occidentales señalan con el dedo a las empresas chinas en África, casi como una manera de distraer la atención del hecho de que las empresas más poderosas en el negocio de la extracción de recursos naturales no son chinas. Las diez principales empresas transnacionales que operan en el continente africano son:

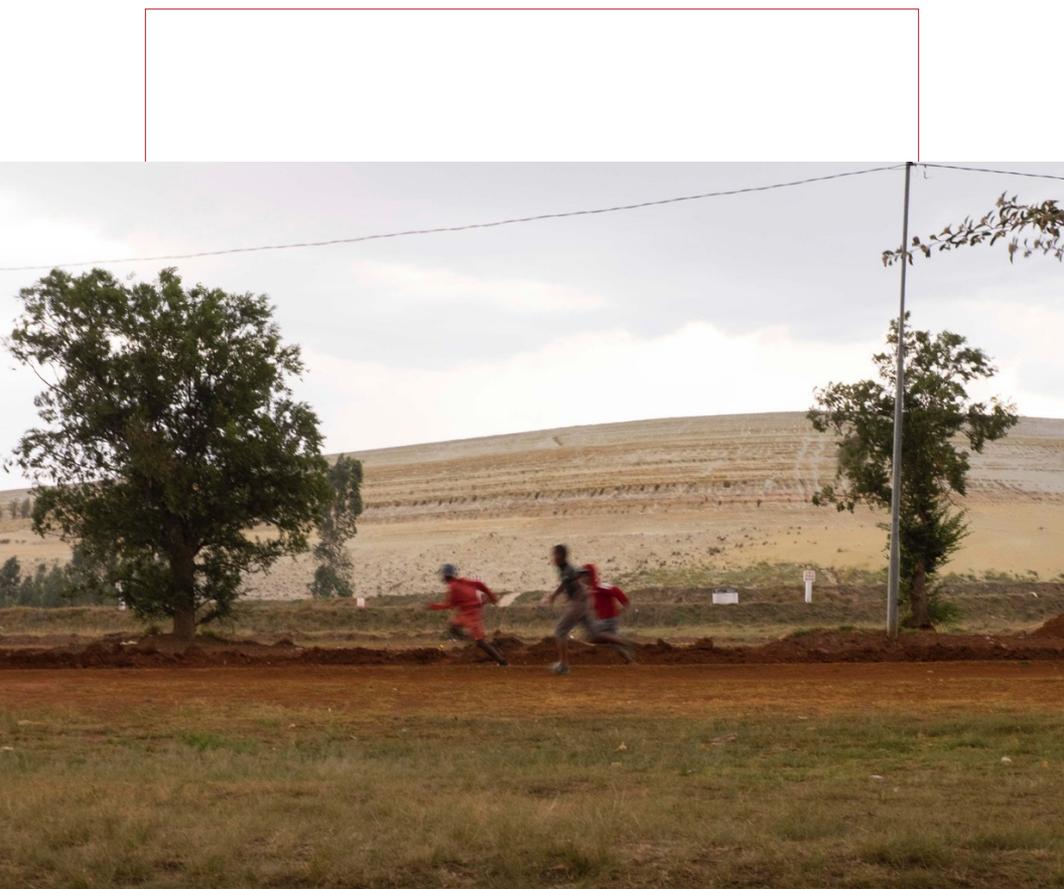
1. Anglo-American (Reino Unido)
2. Rio Tinto (Australia)
3. Vale (Brasil)
4. BHP Billiton (Australia)
5. Barrick Gold (Canadá)
6. Freeport-McMoran (EE. UU.)
7. Newmont Mining (EE. UU.)
8. Teck (Canadá)
9. Goldcorp (Canadá)
10. Alcoa (EE. UU.)

Ignorar el poder de estas empresas para obtener la gran mayoría de los ingresos de los recursos extraídos del continente africano es dejar de lado un problema institucional clave al que se enfrentan los países africanos: el saqueo a escala colonial y la falta de soberanía sobre sus recursos.

El conocimiento occidental pro-corporativo sofoca las posibilidades de futuro. Se da poco espacio a las luchas de los pueblos del continente contra los excedentes extraídos de sus países y de su fuerza de trabajo. Cualquier debate sobre una salida de las relaciones capitalistas que estructuran la extracción de recursos del continente es ajeno a toda esta literatura. Es en este contexto que nos interesan las posibilidades de un nacionalismo de los recursos o de la soberanía de los recursos. ¿Puede el nacionalismo de los recursos o la soberanía de los recursos proveernos herramientas alrededor de las cuales construir una voluntad colectiva nacional-popular contra las depredaciones capitalistas del continente?

Para profundizar sobre los temas del saqueo capitalista y el nacionalismo de los recursos, el **Instituto Tricontinental de Investigación Social** conversó con Gyekye Tanoh, director de la Unidad de Economía Política en la Red del Tercer Mundo – África, con sede en Accra (Ghana).





22 de noviembre de 2017: Niños pasando por un vertedero de una mina de oro en Slovoville, en las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica.  
Fotografía de Daylin Paul

 Uno de los grandes escándalos del siglo XXI es el robo de recursos del continente africano. ¿Podría contextualizar cómo se produce ese robo?

África, desde su historia colonial hasta su historia poscolonial, se ha especializado como fuente y proveedora de materias primas para el resto del mundo. Muchas de las agendas de políticas públicas de la región continúan siendo dominadas por potencias extranjeras, así como por instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Su historia, desde la esclavitud y el colonialismo hasta el presente, ha creado un paisaje en el que la dominación de las empresas extranjeras es inmensa, más pronunciada que en cualquier otra parte del mundo. Un rasgo definitorio de esta dominación es el tremendo desequilibrio de poder en el que existe una inmensa influencia de las corporaciones para explotar la fuerza de trabajo y los recursos del continente, destruir el ambiente y dictar las políticas públicas a los gobiernos. En otros países, como Canadá, por ejemplo, una empresa está obligada a respetar ciertas leyes, en términos relativos, en relación con las regulaciones ambientales, la legislación sobre impuestos corporativos, y algunas normas laborales. Pero la empresa canadiense en África opera sin ninguna de estas restricciones. Lo que es bueno para Canadá no es bueno para Camerún.

Un informe reciente del Banco de Ghana muestra algunas estadísticas alarmantes. De los 5.200 millones de dólares en oro que exportan de Ghana las empresas mineras de propiedad extranjera, el gobierno sólo recibió 68,6 millones de dólares por

regalías y 18,7 millones por concepto de impuesto a la renta de las empresas. En otras palabras, el gobierno recibió menos del 1,7% del total de ganancias de su propio oro. Dado que estas cifras subestiman enormemente el valor de las exportaciones de oro, los beneficios para Ghana son mucho menores. Lo que es aún más chocante es que, basados en los análisis del Banco de Ghana, la parte de la riqueza que va a las comunidades directamente afectadas por la minería es del 0,11%.

¿Siempre ha sido así? No cabe duda de que el continente africano ha sido explotado durante mucho tiempo, pero esta estructura de saqueo particularmente agravada tiene sus raíces en el período de la crisis de la deuda de los años ochenta. Antes de eso, en la era de liberación nacional, los Estados trataron de proteger sus materias primas y obtener mejores acuerdos comerciales. Pero la crisis de la deuda debilitó su poder de negociación. Los gobiernos africanos de fines de los 80 y de los 90 fueron presionados por las instituciones financieras internacionales y las corporaciones transnacionales a ajustar su actitud negociadora. Se les instó a promover rápidamente el crecimiento basado en exportaciones sobre la base de la teoría de las ventajas comparativas. Poco importaba que la «ventaja comparativa» de la mayor parte del continente estuviera en las exportaciones de los sectores extractivos y no en el sector industrial (que tiene mayor potencial de valor agregado). La exportación de materias primas no procesadas o poco procesadas generaba ingresos que no se destinaban a la inversión interna, sino que se utilizaban para pagar la deuda.

Lo que vimos como resultado de esta exportación de materias primas y exportación de rentas para pagar la deuda fue una *industrialización prematura*. En 2003, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) propuso este concepto de industrialización prematura para explicar lo que estaba ocurriendo en el Sur Global. Se refiere al colapso del sector manufacturero antes de haberse convertido en parte integral de la economía. Si el sector manufacturero no se desarrolla, entonces la clase política obtiene ganancias mediante la exportación, en el caso africano, de materias primas. Las economías nacionales retrocedieron, con una reducción del empleo productivo y de la movilización de recursos y una caída de la demanda agregada. La gente no podía ahorrar ni invertir en la producción local o constituir salidas viables de demanda y vínculos de suministro para la producción en otros lugares de sus economías locales. El Estado tampoco podía recaudar recursos suficientes para proporcionar servicios sociales e infraestructura. La marginalización estructural del pueblo debilita su capacidad para dar forma a las políticas públicas estatales.

La creciente dependencia de las exportaciones de materias primas significa una dependencia creciente de las empresas extranjeras y de los mercados externos. El Banco Mundial exigió esto y lo santificó en un documento publicado en 1992. Este documento establece claramente que los gobiernos deben cambiar sus políticas «hacia el objetivo primordial de, a largo plazo, maximizar los ingresos fiscales de la minería, más que perseguir otros objetivos económicos y políticos como el control de los recursos y el incremento del empleo» (Banco Mundial,

*Strategy for African Mining* [Estrategia para la Minería Africana], 1992). En otras palabras, los gobiernos deben limitarse a exportar materias primas y permitir que las compañías mineras extranjeras roben recursos. No deben intentar «controlar los recursos» ni crear empleos.



17 de junio de 2018: Mineros cargando carbón en una mina "ilegal" en Mpumalanga, Sudáfrica.  
Fotografía de Daylin Paul

 Mientras el banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales presionaban a los gobiernos del continente para exportar materias primas y no preocuparse por los objetivos de desarrollo más amplios, se abrió una interesante dicotomía. Hubo una nueva sugerencia de que los «países ricos en recursos» eran «pobres en gobernanza». En otras palabras, que el problema de la corrupción no estaba en el sistema como tal, sino en la clase política y en el Estado. ¿El discurso de la mala gobernanza es otra forma de socavar las fuerzas sociales y las instituciones que podrían haber impulsado la democratización de la política de Estado?

A partir de los años noventa, el término «gobernanza» se instaló en el corazón del discurso sobre el desarrollo. Todo era cuestión de «buena gobernanza» y su importancia. Hay algo muy superficial en este debate. Ignora, incluso oscurece, la dinámica estructural profunda que empuja a un país a volverse en exportador de materias primas y que da a las empresas transnacionales el poder para determinar los precios y la parte de los ingresos que deben entregar a los Estados. No es la «corrupción» de los funcionarios del gobierno la que lleva a Ghana apenas 1,7% de los ingresos del oro a las arcas del Estado. Se estableció todo un sistema desde la década de 1980 para forzar a los países a depender de las exportaciones de materias primas y depender de compradores extranjeros y eso es lo que deja a países como Ghana con una cantidad tan minúscula de la riqueza extraída de las tierras ghanesas. La «buena gobernanza» no va a resolver esto, a menos que la «buena gobernanza» se refiera también a la dinámica estructural profunda.

El discurso dominante sobre la gobernanza de los recursos, el lenguaje de la «buena gobernanza» tiene varios impactos profundamente distorsionantes. Implica que son apenas los comportamientos aberrantes de lxs funcionarixs públicxs los que deben ser vistos como corrupción. Aunque por supuesto, la falta de recursos disponibles para las instituciones públicas responsables hace imposible crear o sostener mecanismos nacionales significativos anticorrupción. El abrumador poder de las corporaciones transnacionales hace virtualmente imposible aplicar normas de gobernanza genuinamente democráticas y de desarrollo a estas empresas cuando operan en Ghana, en Zambia o en Papúa Nueva Guinea.

Si la discusión se centra en las cifras bajas de ingresos, entonces las instituciones financieras internacionales dirigen la discusión hacia los choques naturales del mercado. Hay, dicen, auge y quiebras de las commodities. Pero esto no es suficiente como explicación. Incluso en tiempos de auge de las commodities, los ingresos son minúsculos. En esa época es cuando se puede observar la economía política de la extracción en su mayor relieve. Un antídoto para los ciclos de boom y caída, que existe, es que los recursos públicos se dediquen sustancialmente a mejorar las actividades productivas de lxs trabajadorxs y las capacidades productivas de la economía. Esto es posible en Estados ricos en recursos que tienen economías diversificadas, dado que tienen autonomía frente a la dominación imperial e instituciones socialdemócratas conseguidas por la lucha de lxs trabajadorxs. Estos Estados crearon Fondos de Riqueza Soberana (FRS) con los ingresos de la exportación de recursos naturales. Noruega

es un ejemplo muy citado de ello. Este debería ser un requisito mínimo para todos los países dependientes de recursos naturales: ahorrar en tiempos de bonanza y usar los FRS en tiempos de escasez. Pero en un boom de commodities, los ingresos son simplemente insuficientes para construir infraestructura y satisfacer las necesidades básicas de la población. Esperar que Zambia o Ghana creen ese tipo de fondo soberano a partir de unos ingresos tan nimios y con una base económica tan estrecha que es completamente dependiente de los mercados externos y del capital extranjero no es realista.

En la era de financiarización, la mayoría de los fondos soberanos invierten principalmente en valores financieros. Este fue el caso del FRS de Angola, una gran parte del cual se destinó a la compra de valores financieros, especialmente en Portugal, su antiguo gobernante colonial. Perdió mucho con estas «inversiones» cuando Portugal se vio envuelto en la crisis financiera de la Eurozona después de 2008. En lugar de invertir en mercados financieros, estados como Angola y Nigeria podrían invertir directamente en la producción a través de bancos de desarrollo. Estos bancos podrían proporcionar crédito a las cooperativas agrícolas e industriales y otras iniciativas similares que generen empleo, bienes y servicios para satisfacer necesidades reales. Esto requiere Estados que controlen el sector financiero y que se preocupen de verdad por el bienestar público.

El lenguaje de la «buena gobernanza» se usa para deslegitimar cualquier aspiración a la nacionalización y a la creación de un monopolio estatal. Un hecho sorprendente es que la industria

del cobre de Zambia fue mejor para Zambia en la época del monopolio estatal entre 1970 y 1998. Los retornos de la industria del cobre al tesoro del Estado en el periodo post monopolio estatal han sido de apenas el 3% de lo que fueron en los malos tiempos del monopolio estatal. Este es un hecho incómodo para los adalides de la privatización. El discurso de la «buena gobernanza» sugiere que los Estados de los países en desarrollo, como Zambia, son congénita y profundamente corruptos. La única salvación, dicen, es que el gobierno adopte regímenes de libre mercado. Pero, por supuesto, el resultado ha sido terrible. «Déficits de gobierno» o «mala gobernanza» no explican la desindustrialización de Zambia ni el retroceso de la diversificación económica. Debido a que Zambia ahora es totalmente dependiente de las exportaciones de cobre, los cambios del precio internacional del cobre tienen un efecto preponderante y distorsionante en la tasa de cambio del kwacha (la moneda de Zambia). Esta distorsión y los limitados ingresos provenientes de las exportaciones de cobre afectan la competitividad y la viabilidad de otras exportaciones no relacionadas con el cobre, como resultado de las fluctuaciones del kwacha. Esas fluctuaciones también afectan al sector social. Un estudio realizado en 2018 mostró que las variaciones en las tasas de cambio oscilaron entre -11,1% y +13,4% en el período entre 1997 y 2008. La pérdida de fondos por parte de donantes al Ministerio de Salud de Zambia pasó de 13,4 millones de dólares a 1,1 millones por año. Debido al colapso del kwacha entre 2015 y 2016, el gasto per cápita anual en salud disminuyó de 44 a 23 dólares.

La corrupción implica que los efectos perversos son el resultado de que alguien rompe las reglas, en lugar de ser el resultado del funcionamiento normal del sistema. Todo lo que he descrito se basa en el funcionamiento normal. Cuando el Estado permitió a las empresas extranjeras tomar el control de la extracción de materias primas y cuando la economía se volvió dependiente de la exportación de esas materias primas a expensas de un proyecto de diversificación, el resultado fue menos ingresos para el pueblo y una economía en crisis a largo plazo. El discurso de la «buena gobernanza» evita referirse al funcionamiento normal.

El discurso de la gobernanza de los recursos muestra una versión de la realidad muy lejos de la verdad. Primero, tenemos desindustrialización prematura, que lleva a la terrible realidad de pobreza y desesperanza. Entonces surge el discurso de la corrupción para explicar la pobreza y la desesperanza. Pero no es la corrupción la que crea esta situación. Es la estructura que debilita las capacidades nacionales y la planificación económica democrática y participativa que es la que mejor podría garantizar la rendición de cuentas y la efectividad del Estado, deja de lado el proyecto de diversificación e industrialización y entrega las materias primas a corporaciones multinacionales extranjeras. Una vez que se ha ocultado la estructura, entonces se puede culpar al soborno, el parásito más pequeño, como el autor de la miseria. Esto es lo que hace el discurso de la gobernanza de los recursos.



27 de septiembre de 2018: Un trabajador en Agbogbloshieel, el mayor vertedero de desechos electrónicos del mundo, en Accra, Ghana, transporta material a través de lo que solía ser una zona de humedales.  
New Frame / Ihsaan Haffejee



¿Podría darnos su evaluación sobre la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva, la Carta de los Recursos Naturales y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (conocida como NEPAD, por sus siglas en inglés)? Parece que cada una de ellas, de formas diferentes, es clave para la proliferación del discurso de la buena gobernanza y para disciplinar a los movimientos políticos y a las instituciones del Estado.

De estas tres, la NEPAD es la primera. La Unión Africana la adoptó en 2001 como marco de las políticas para el continente. NEPAD promovió la idea de que la democracia y la buena gobernanza son condiciones previas para el desarrollo. La estructura del saqueo estaba, una vez más, fuera de la discusión. La Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés) surgió en 2003 de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Johannesburgo, Sudáfrica. De ahí surgió la Carta de los Recursos Naturales, particularmente del comité directivo de la Unión Africana para la NEPAD, en 2011. Todas estas iniciativas siguen la misma lógica. No buscan ningún involucramiento real en la distribución de las rentas y la propiedad ni el control de la producción, los problemas fundamentales del continente africano. Tampoco cuestionan las relaciones políticas y económicas que subyacen al saqueo. Sobre este último punto, si abrieran la cuestión de las relaciones de saqueo, entonces tendrían que prestar atención a la distribución desigual de beneficios y a la falta de compensación para los propietarios naturales de los recursos del subsuelo y la mano de obra que realmente crea productos útiles o valiosos a partir de estas dotaciones. También

podrían tener que discutir las prioridades para un país, y el mal desarrollo que se produce cuando un gobierno se reduce a ser un mero conducto para la exportación de materias primas.

Es importante señalar que la Carta de los Recursos Naturales, aunque fuera aprobada por la Unión Africana, fue redactada por intelectuales de las instituciones financieras internacionales. Entre estos intelectuales se encuentran Paul Collier, que era del Banco Mundial y Anthony Venables, un profesor de Economía en Oxford. En 2013, la Carta de los Recursos Naturales y el *Revenue Watch Institute* se fusionaron para formar el *Natural Resource Governance Institute*, con sede en Nueva York. Lo dirige Daniel Kaufmann quien trabajó en el Banco Mundial. Este instituto está dedicado a promover la Carta de los Recursos Naturales.

Para estas iniciativas, los valores de transparencia y rendición de cuentas son fines autosuficientes. Si su gobierno es transparente, entonces está bien y es bueno. La transparencia y la rendición de cuentas no se proponen como medios para lograr otro fin. Si ese fuera el caso, entonces, ¿cuál sería su finalidad aparte del concepto muy genérico de desarrollo sostenible? ¿El fin podría ser un gobierno capaz de proporcionar los bienes sociales necesarios o una población que tiene sus necesidades atendidas y que, por lo tanto, puede relucir?

Es importante subrayar que «transparencia» en este contexto tiene un significado muy específico. Significa que un gobierno debe alinear sus políticas con los principios básicos de las instituciones financieras internacionales. Estos principios incluyen normas

relacionadas con el comercio para la liberalización de las inversiones y el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual. Si un gobierno se adhiere a estos principios, entonces es un gobierno transparente. El Banco Mundial y Transparencia Internacional movilizaron a menudo el lenguaje de la anticorrupción contra los gobiernos que no estaban dispuestos a rendirse a estos principios. Los gobiernos que trataron de mantener algún grado de soberanía fueron etiquetados como «pobres en gobernabilidad». Por cierto, ningún país central «rico en recursos» – como Australia y Canadá – era «pobre en gobernabilidad» a pesar de que hay escándalos en estos países. El gobierno canadiense está en medio de un escándalo por los sobornos pagados por la SNC-Lavalin (una empresa canadiense) a funcionarios libios. Transparencia Internacional dice que Canadá está en la posición 9º entre 180 países, o sea entre los 10 menos corruptos (Dinamarca es el líder mundial, por cierto). Libia, por su parte, está en la posición 170 entre 180 (Somalia es el país más corrupto de acuerdo con este índice). Lo que hace a Canadá, cuya compañía es la que soborna, menos corrupta que Libia, cuyos funcionarios reciben el soborno, es parte de la manera en que opera la «transparencia» en nuestros tiempos.

La NEPAD, arraigada en el continente africano, promueve el trabajo de la EITI y la Carta de los Recursos Naturales a expensas de las instituciones y la toma de decisiones africanas autónomas. Un ejemplo de desarrollo liderado por África es la *African Mining Vision* [Visión de la Minería Africana] que fue adoptada en febrero de 2009 por la Unión Africana. En octubre de 2008, los ministros africanos que trabajaban en el ámbito del desarrollo de recursos

minerales se reunieron para redactar este documento. Reflejaba la frustración de que una región con gran riqueza de recursos pudiera ser al mismo tiempo tan pobre. Un aspecto central de la Visión de la Minería Africana es el llamado a integrar la cuestión minera en una agenda de desarrollo más amplia. Estos aspectos de la Visión de la Minería Africana también fueron en parte el resultado de luchas populares en las comunidades y por parte de lxs trabajadorxs en los sectores de recursos.

Los marcos impulsados por Occidente – como la Carta de los Recursos Naturales – dejan de lado las iniciativas impulsadas por África. Los marcos normativos y la credibilidad institucional de los procesos impulsados en África, por muy limitados que sean, se ven socavados por el predominio intelectual y político de los marcos impulsados por Occidente. Esta así llamada escasez intelectual proporciona más evidencia de que los «países en desarrollo ricos en recursos» son automáticamente «pobres en gobernabilidad» porque después de todo ni siquiera tienen una estructura para hacer frente a la «corrupción». Esta supuesta ausencia justifica la ayuda externa de la «comunidad internacional», es decir, de los Estados occidentales y sus instituciones para definir las normas de gobernanza y les da la legitimidad para movilizar actores de las comunidades subnacionales y de la sociedad civil para la implementación de las políticas. El propósito de la EITI y de la Carta de los Recursos Naturales es asegurar que los fundamentos del sistema – el saqueo – permanezcan inalterados o que se perpetúen y amplíen.



26 de marzo de 2019: Makhebengwana se para en la puerta de su cocina y señala el lugar donde será reubicado debido al Proyecto Newcastle de Ikwezi Mining, en Sudáfrica.

New Frame / Madelene Cronje



¿Podría explicarnos una alternativa al paradigma de la «buena gobernanza», hacia conceptos como el «nacionalismo de los recursos» y la «soberanía de los recursos»?

Una gran parte de las materias primas en África son propiedad de un pequeño grupo de poderosas corporaciones, pero esto se agrava aún más por el hecho de que sucede que la mayoría de ellas también son compañías extranjeras. Estas compañías actúan con todo el peso del poder de sus gobiernos. *Barrick Lumwana*, por ejemplo, es una de las cuatro compañías extranjeras que representan el 80% de la producción de cobre de Zambia. *Barrick Lumwana* es una subsidiaria de *Barrick Gold*. El nombre es engañoso. Lumwana es una ciudad en Zambia. *Barrick Lumwana* simplemente le da a *Barrick Gold Corporation*, una empresa canadiense, un nombre zambiano que la hace parecer menos extranjera. *Barrick Gold* está totalmente respaldada por el gobierno canadiense en sus operaciones en Zambia.

Durante el boom mundial de las commodities, entre 2000 y 2014, tanto América Latina como África experimentaron el impacto del aumento de los precios de las materias primas. Pero las dos regiones lo experimentaron de formas radicalmente diferentes. En el caso de África, debido al control casi monopólico que las corporaciones tienen sobre los recursos naturales, los beneficios de la economía natural fueron marginales para los gobiernos africanos y sus poblaciones. Los beneficios fueron derivados a favor de las compañías extranjeras y sus respectivos países. Los enormes beneficios del boom de las commodities fueron

absorbidos por las empresas extranjeras y una minúscula élite local.

La experiencia del continente africano durante el último boom de las commodities demuestra que es necesario y lógico que un país rico en recursos busque el pleno control nacional sobre sus recursos naturales. Es una respuesta razonable ante una realidad que, por lo demás, es profundamente injusta y destructiva.

El primer aspecto a reformar deben ser las asimetrías económicas que han surgido como resultado de la cultura actual de apropiación de recursos. Hay tres problemas inmediatos aquí: las disparidades salariales, que también son una expresión de la superexplotación, los incentivos tributarios, y la fuga de capitales por la vía de la repatriación de ganancias y la subcontratación a distancia. La estructura y la composición del empleo en las industrias extractivas es clamorosa. Los puestos de mayor cualificación típicamente suelen ser ocupados por expatriados, en su mayoría occidentales. Las diferencias salariales entre estos expatriados y los africanos son enormes; en las empresas mineras a veces llegan a ser de 600 a 1. De hecho, en los sectores exportadores, estamos testimoniando el crecimiento del fenómeno de la «superexplotación» que es el pago a la mano de obra por debajo del costo de supervivencia y del costo de vida de los trabajadores. Y dado que la tecnología está monopolizada por las empresas transnacionales, la única manera de que las exportaciones producidas localmente sigan teniendo precios competitivos en los mercados internacionales es la deflación interna drástica, que afecta mayormente a la mano de obra local

y a otros grupos de productores que se encuentran más abajo en la cadena alimentaria de las cadenas de valor mundiales.

El otro problema es el saqueo a través del sistema impositivo. Además de las exenciones tributarias que reciben todos los inversionistas extranjeros, como un período de vacaciones de impuestos de 10 años, así como una tasa más rápida para amortizar las pérdidas de capital, tenemos una cosa que se llama la lista minera. Esta lista incluye todo lo que las empresas mineras importan del extranjero, como papel higiénico, toallas desechables, agua embotellada y hasta pasta de dientes. Todas estas cosas están exentas de impuestos. Muchas de las cosas que no tienen nada que ver con el sector minero entran directamente al país sin pagar impuestos. El impuesto condonado sobre esos bienes, si se suman los valores, puede ser considerable para una economía que tiene reservas de divisas débiles.

La inmensa mayoría de los beneficios se retienen o se devuelven al extranjero como ganancias de capital, intereses de dudosos préstamos intraempresariales, comisiones por administración o rentas de propiedad intelectual. Es el crecimiento fenomenal en la multiplicación de las fuentes de extracción de excedente y en la extravención de beneficios en la última década lo que ha atraído la atención de los medios de comunicación y de las políticas mundiales como «flujos financieros ilícitos», que en términos relativos están creciendo más rápido en África que en cualquier otro lugar.

Entonces, ya se trate de explotación salarial, de incentivos tributarios o de participación en los ingresos y las ganancias, los beneficios asociados a la extracción de recursos naturales son grotescos y altamente adversos para los países que tienen recursos naturales y para la mayoría de sus poblaciones. Desde ese punto de vista, hay validez en la búsqueda del nacionalismo de los recursos como proyecto político.

Tenemos que ser precisos acerca de nuestro sentido del nacionalismo de los recursos. En el ejemplo de la minería, podría incluir la nacionalización completa de las minas o podría incluir reformas menores como impuestos más altos a las empresas extranjeras. También podría incluir un salario básico más alto para lxs trabajadorxs, lo que se traduciría en una mayor proporción de la actividad minera que permanece en las comunidades que viven encima o cerca de los recursos. Los países también pueden insistir en regalías más altas y en regalías establecidas respecto al precio final de mercado de los recursos en lugar de los precios que ellos establecen, que a menudo son inferiores. Todas estas políticas públicas constituyen la base del nacionalismo de los recursos.

Pero creo que es importante subrayar aquí algunos conceptos erróneos que podrían aparecer en nuestra discusión. En primer lugar, es necesario entender que el problema del continente no es simplemente el engaño, la negligencia corporativa frente a una norma que de otro modo sería ejemplar. Toda la forma de la minería – dentro del sistema capitalista – se desarrolla alrededor de la explotación de la fuerza de trabajo, la creación de



21 de marzo de 2019: mineras despedidas de la mina South Deep de Gold Fields fotografiadas en Borwa, Sudáfrica. Se enfrentan a la pérdida de sus hogares después de sus despidos en diciembre de 2018.  
New Frame / Mujahid Safodien

plusvalía que luego el capital acumula mientras los trabajadores vuelven a casa con una parte cada vez menor de la plusvalía. En segundo lugar, esto implica que no se puede asumir que el nacionalismo de los recursos es meramente un proyecto político centrado en el Estado. Lxs trabajadorxs – los mineros en este caso – son un agente clave de cambio, construyendo sus propias luchas contra el funcionamiento normal del capitalismo. Las luchas de lxs trabajadorxs enriquecen a la sociedad, planteando las cuestiones de etnicidad, género y otras formas de opresión en los debates sobre el tipo de sociedad que se quiere producir y en la que se quiere vivir. La lucha de clases en nuestras sociedades es fundamental para el desarrollo del proyecto de soberanía de los recursos, ya que, de otra manera, el asunto se queda en un debate entre la burguesía imperialista y la burguesía nacional, sin plantear la cuestión fundamental del empobrecimiento de lxs trabajadorxs y de la sociedad en general.

Me gustaría ampliar la idea del nacionalismo de los recursos. No se refiere solamente a los minerales, el gas y el petróleo. Incluye el agua y la tierra, así como las condiciones de la producción agraria. En el Sur de África la cuestión de la tierra es central como hemos visto en Zimbabue y como vemos en Sudáfrica. El tema ha sido colocado en la mesa por lxs desposeídxs, sea a través de ocupaciones de tierra, boicots o huelgas. Las discusiones sobre la soberanía de los recursos son muy útiles en este contexto. Permiten ampliar la conciencia política de todos los sectores de la sociedad. Este marco del nacionalismo de los recursos no ve las cuestiones de los recursos desde el punto de vista de un agricultor en una aldea remota cuyos árboles están siendo talados

por una corporación y que busca una compensación por esto. Quiero, decir, el agricultor debería recibir una compensación, pero esto no constituye todo el marco del nacionalismo de los recursos. El marco incluye tanto al agricultor cuyos árboles están siendo talados como a los pescadores a los que se les niega acceso a ciertos tramos del río o partes del mar, así como los trabajadores agrícolas que carecen de riego. A todos se les niega el uso de recursos cruciales que a menudo se entregan a las empresas. Las luchas populares por compensaciones y por irrigación son llevadas a este mismo marco, permitiendo que las luchas desarrollen estrategias comunes a partir de un análisis sistemático del despojo. Por supuesto, el nacionalismo de los recursos puede traer beneficios materiales inmediatos para la clase trabajadora y el campesinado que viven en países ricos en recursos.

Sean cuales fueran las limitaciones del nacionalismo de los recursos, y son muchas, es un marco importante para el continente. Se trata de una reacción, una primera reacción contra la globalización neoliberal, y es importante que fomentemos el debate al respecto.

Pero si creo que debemos ser muy conscientes de las limitaciones del nacionalismo de los recursos, especialmente si el nacionalismo oculta los intereses de clase en juego. Si usamos una lente estrecha Norte – Sur, existe la tentación de cegarse ante la explotación laboral en el Sur, donde una burguesía local opera en contra los intereses del campesinado y de la clase trabajadora del Sur. Se requiere un análisis de clase mucho más cuidadoso.



4 de octubre de 2017: La koppie (loma) en Marikana, Sudáfrica, donde tuvo lugar la masacre de 34 mineros en 2012.  
Fotografía de Daylin Paul

Para darles un ejemplo de las trampas, tomemos el caso del Congo. Las compañías mineras, así como los gobiernos belga, británico y estadounidense se opusieron totalmente al ala de Patrice Lumumba del movimiento nacionalista, no solo porque lo que percibían como una posible amenaza de nacionalización de los recursos sino también por la creciente ola de lucha de clases de trabajadorxs y mineros. Fue esta ola de luchas la que catapultó a Lumumba y al Movimiento Nacional Congoleño a ascender entre una colección de organizaciones independentistas sectarias y fraccionadas. A finales de 1959, Lumumba estaba en la cárcel, pero en un plazo de seis meses era el Primer Ministro de un país vasto, rico en recursos y recién independizado. Y aquí es donde la cuestión de clase se vuelve importante. Moïse Tshombe, el rival de Lumumba era el líder de la provincia de Katanga, donde se encuentra el grueso de las riquezas del Congo. Tshombe impulsó una agenda nacionalista que le ganó los votos de Katanga y eventualmente le permitió – en una supuesta plataforma de nacionalismo de los recursos – reclamar la secesión. Lumumba fue arrestado, eventualmente asesinado y el nacionalismo de Tshombe se disolvió en una capitulación total al imperialismo. *Le mal zaïrois*, la enfermedad zaireña es un término desarrollado durante la era del sucesor de Tshombe, Mobuto para referirse no solo a la corrupción personal de Mobuto sino también al robo de la riqueza del Congo (entonces Zaire) por parte de corporaciones occidentales.

Al mismo tiempo que las esperanzas del Congo se disolvían en el saqueo, los mineros bolivianos de estaño y los trabajadores agrícolas sin tierra lideraron una lucha, incluida una marcha

histórica contra el hambre en La Paz, la capital de Bolivia, que derrocó al gobierno. Esa fue la Revolución Nacional Boliviana de 1952. El nuevo gobierno implementó reformas agrarias y control sobre las minas, pero la presión económica llevó al colapso de todas las nuevas instituciones una década después. Sin embargo, la memoria de la revolución permaneció y se despertó en el nuevo siglo, en 2000, cuando el pueblo de Cochabamba luchó contra la privatización del agua. Una vez más, lxs trabajadorxs del campo y de las minas, muchos de ellos de comunidades indígenas, se levantaron para crear una resistencia genuina desde abajo, basada en un nacionalismo de los recursos de la clase trabajadora. En su agenda estaban los derechos al agua, pero también los derechos de lxs cocalerxs y de los trabajadorxs petroleros, los derechos a la cultura y la representación, los derechos a ser la tierra y de la tierra. Este amplio movimiento de clase desde abajo definió la siguiente fase de la historia boliviana. Uno de los países más débiles de Latinoamérica fue capaz de llevar a cabo los cambios de mayor alcance en el sector de los recursos gracias a este movimiento clasista.

Debemos ser audaces e inflexibles en nuestro compromiso con un movimiento clasista que defienda el mundo natural y que defienda los derechos comunes del pueblo a los recursos. Necesitamos formular una agenda alternativa de gobernanza de los recursos que esté definida por un proyecto de desarrollo democrático, basado en la clase, que no sea sectario sino internacionalista.





25 de octubre de 2018: Residentes de la aldea Lesethheng en la provincia Noroeste de Sudáfrica celebran ante el Tribunal Constitucional después de que éste anulara la disposición del Tribunal Supremo de desalojarlos de sus tierras agrícolas.  
New Frame / Ihsaan Haffejee



Instituto Tricontinental de Investigación Social  
*es una institución promovida por los movimientos,  
dedicada a estimular el debate intelectual al servicio  
de las aspiraciones del pueblo.*

[www.eltricontinental.org](http://www.eltricontinental.org)

Instituto Tricontinental de Pesquisa Social  
*é uma instituição internacional, organizado por  
movimentos, com foco em estimular o debate  
intelectual para o serviço das aspirações do povo.*

[www.otricontinental.org](http://www.otricontinental.org)

Tricontinental: Institute for Social Research  
*is an international, movement-driven institution  
focused on stimulating intellectual debate that serves  
people's aspirations.*

[www.thetricontinental.org](http://www.thetricontinental.org)